

Examinado el fallo de primera instancia de cara al recurso y al cumplimiento de las directrices constitucionales y legales a aplicar en función de la protección de los derechos fundamentales, no puede dejar de resaltar la Corporación que se echó de menos el mínimo esfuerzo del fallador de primer grado en el desarrollo de la función que le es propia.

En efecto, desatendió el *a quo* el deber de estudiar en forma minuciosa, detallada y completa el asunto sometido a su consideración, olvidando que el Juez está obligado a verificar que su decisión abarque todas las temáticas propias del proceso y sea congruente con los hechos puestos a su consideración, máxime cuando está de por medio la protección de derechos fundamentales, porque sin desconocer que la falibilidad es característica del ser humano no se puede dejar de exigir una mayor aplicación en el ejercicio judicial en procura de garantizar el valor justicia en las decisiones judiciales, ya que es rampante la facilidad con la que se emitió la decisión impugnada.

Se demanda, entonces, del funcionario judicial por lo menos un mínimo estudio del caso, así como el cumplimiento de los perentorios términos legalmente fijados en materia de tutela. Por ello, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, recordó en la decisión de octubre 28 de 2009, proceso con Radicado No. 31263, siendo M.P. el Dr. YESID RAMÍREZ BASTIDAS, que *"la providencia judicial no puede ser una simple sumatoria arbitraria de motivos y argumentos, sino que requiere una arquitectura de construcción argumentativa excelsa, principal muestra de lealtad del juez hacia la comunidad y hacia los sujetos procesales."*

Como consecuencia de lo expuesto, se ordenará compulsar copias para que se investigue la mora con que el Juez Segundo Penal del Circuito falló éste asunto, cuando de 10 días que señala la ley se tomó aproximadamente cuatro (4) meses.

Sin necesidad de más consideraciones, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, Sala Única de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el fallo de primera instancia y, en su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la vida, derechos prevalentes de los niños a la integridad personal y a

Radicado: 2014-00052-03
Acción de tutela- Segunda instancia
Accionante: César Ortiz de Armas
Accionados: Asociación de cabildos indígenas del Cesar y la Guajira Dusakawi EPS y otros

verse libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la dignidad personal, seguridad personal, seguridad social, salud diferenciada, educación diferenciada, libre desarrollo de la personalidad, libertad de expresión, asociación, integridad cultural y territorial de las comunidades indígenas, diversidad étnica y a recibir atención especial del Estado por su alta vulnerabilidad y ser además víctimas del desplazamiento forzoso, de los resguardos COROCITO, MATECANDELA y LA ESTRELLITA y de la comunidad CAÑO MICO, pertenecientes a los pueblos indígenas SIKUANI y MAKAGUAN, respectivamente.

SEGUNDO: ACCEDER a las pretensiones de la acción, determinando que el amparo del pueblo SIKUANI se ordenará en forma definitiva y sin ningún condicionamiento, y el del pueblo MAKAGUAN se ordenará en forma provisional hasta que la respectiva Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional no disponga nada diferente, para lo cual se le comunicará la determinación que aquí se adopta con respecto a la comunidad CAÑO MICO del resguardo CAÑO CLARO del pueblo MAKAGUAN, por cuanto el citado resguardo ya había sido cobijado por protección constitucional. LÍBRESE el oficio respectivo.

TERCERO: ORDENAR a las EPS-I DUSAKAWI, CAPRECOM EPS y COMPARTA ARS-S, cada una dentro del marco de sus afiliados que, en el término estrictamente necesario de conformidad con la ley para el agotamiento de las etapas contractuales y demás a que haya lugar, sin exceder de tres (3) meses, siguientes a la notificación del fallo de tutela: (i) realicen los actos administrativos y/o presupuestales necesarios para garantizarles la prestación integral del servicio de salud con enfoque diferencial a los integrantes de las comunidades SIKUANI y MAKAGUAN, esto es, combinando la medicina tradicional de los pueblos indígenas con la medicina occidental; (ii) hagan campañas de prevención en forma periódica, de modo que cesen los riesgos a la salud de la población indígena objeto de la acción, para lo cual deberán ejecutar un proceso gradual de desintoxicación por alcoholismo y drogadicción de los indígenas previamente mencionados, hasta lograr su total recuperación, el que deberá surtirse dentro de su entorno sociocultural y geográfico y en la jurisdicción de los municipios de Tame y Arauca, respectivamente, y; (iii) contraten con IPS o con personas jurídicas o naturales que ofrezcan debidamente los servicios de salud que la citada población indígena requiere y, específicamente programas de desintoxicación por alcoholismo y drogadicción, con médicos, psiquiatras y demás especialistas en este tipo de servicios, lo cual deberá hacerse en un término máximo de seis (6) meses, siguientes a la notificación de la presente tutela.

Radicado: 2014-00052-03
Acción de tutela- Segunda instancia
Accionante: César Ortiz de Armas
Accionados: Asociación de cabildos indígenas del Cesar y la Guajira Dusakawi EPS y otros

CUARTO: ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA asuma su rol de promoción y prevención de enfermedades en la población indígena accionante, e intervenga a las EPS ACCIONADAS que se sustraigan de cumplir con sus obligaciones en la prestación del servicio de salud y, de ser necesario, formule la queja respectiva ante la SUPERINTENDENCIA DE SALUD en el ámbito de la competencia que le fija la ley, especialmente el Decreto 2462 de 2013, y/o ante los demás entes de control, de lo cual deberá rendir informes periódicos cada seis (6) meses a la comisión de seguimiento de estos asuntos de la Corte Constitucional.

QUINTO: ORDENAR al Ministerio del Interior, al Incoder, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Unidad Administrativa Especial para la Acción y Reparación Integral a las Víctimas, al Gobernador de Arauca y al Alcalde del municipio de Tame, determinen si la voluntad de la comunidad CAÑO MICO es el retorno o la reubicación, lo cual harán conforme al procedimiento fijado por la Corte Constitucional en la sentencia T-091 de 2013 y a los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad.

Si la comunidad CAÑO MICO manifiesta la voluntad de reubicación, las autoridades mencionadas deberán en un término igual de seis (6) meses a partir de tal decisión, efectuar y finalizar el proceso de reubicación de la comunidad indígena accionante conforme con los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad, para lo cual deberán además conseguir un territorio con similares características materiales a las que poseían los terrenos que fueron abandonados por causa del desplazamiento forzado, y definir con la participación de la referida comunidad el territorio en el que será reubicada.

La presente decisión deberá cumplirse, previos los trámites a que haya lugar en punto de consulta previa y demás como lo indicó la Corte en la sentencia T-091 de 2013, en un terreno que reúna las condiciones indispensables para su asentamiento y corresponda a un sector en el que no se propicie un eventual conflicto social o confrontación con quienes habitan el entorno, como los que se describen en varios de los informes de los accionados.

La orden aquí contenida deberá cumplirse en un término máximo de seis (6) meses siguientes a la notificación de la presente tutela, término durante el cual el Ministro del Interior, el director del INCODER, el Gobernador del Departamento de Arauca, y el Alcalde de Tame, deberán rendir informes periódicos cada mes sobre el avance de su gestión a la

- Radicado: 2014-00052-03
Acción de tutela- Segunda instancia
Accionante: César Ortiz de Armas
Accionados: Asociación de cabildos indígenas del Cesar y la Guajira Dusakawi EPS y otros

comisión de seguimiento de estos asuntos de la Corte Constitucional, hasta que la orden se cumpla.

SEXTO: ORDENAR al Ministerio del Interior, al Incoder, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Unidad Administrativa Especial para la Acción y Reparación Integral a las Víctimas, al Gobernador de Arauca y al Alcalde del municipio de Arauca, verifique las condiciones en que se encuentran los resguardos COROCITO, MATECANDELA y LA ESTRELLITA del pueblo SIKUANI con ocasión del proceso de reubicación adelantado en el inmueble entregado por el municipio de Arauca, atendidos los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad que cobija a esta población.

En caso de concluirse que el citado inmueble no cumple con las especificaciones requeridas por esta comunidad de especial protección, deberán adelantar y llevar hasta su culminación un nuevo proceso de reubicación en otro bien inmueble, conforme al procedimiento, principios y características fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia T-091 de 2013, para lo cual deberán además conseguir un territorio con similares características materiales a las que poseían los terrenos que fueron abandonados por causa del desplazamiento forzado, y definir con la participación de la referida comunidad el territorio en el que será reubicada.

La presente decisión deberá cumplirse, previos los trámites a que haya lugar en punto de consulta previa y demás como lo indicó la Corte en la sentencia T-091 de 2013, en un terreno que reúna las condiciones indispensables para su asentamiento y corresponda a un sector en el que no se propicie un eventual conflicto social o confrontación con quienes habitan el entorno.

La orden aquí contenida deberá cumplirse en un término máximo de seis (6) meses siguientes a la notificación de la presente tutela, término durante el cual el Ministro del Interior, el director del INCDDER, el Gobernador del Departamento de Arauca, y el Alcalde de Arauca, deberán rendir informes periódicos cada mes sobre el avance de su gestión a la comisión de seguimiento de estos asuntos de la Corte Constitucional, hasta que la orden se cumpla.

Radicado: 2014-00052-03
Acción de tutela- Segunda instancia
Accionante: César Ortiz de Armas
Accionados: Asociación de cabildos indígenas del Cesar y la Guajira Dusakawi EPS y otros

SÉPTIMO: ORDENAR al Departamento de Arauca: (i) el acondicionamiento y adecuación de una infraestructura acorde con las necesidades inherentes a los procesos de desintoxicación y adiestramiento sociocultural y económico de la comunidad CAÑO MICO del pueblo MAKAGUAN y de los resguardos COROCITO, MATECANDELA y LA ESTRELLITA pertenecientes al pueblo SIKUANI, los cuales servirán para su ubicación temporal o definitiva; (ii) la designación de un docente con dominio de la lengua de la comunidad indígena en los dos lugares donde se debe surtir el proceso de desintoxicación, para encausar el proceso educativo de los menores objeto de rehabilitación, y; (iii) el adelantamiento, en asocio con otras entidades del orden territorial y nacional, de una política pública de atención diferencial en salud para la prevención, mitigación, atención y rehabilitación integral de las familias indígenas con problemas de adicción a sustancias psicoactivas y alcoholismo, con la participación efectiva de las autoridades legítimas de los pueblos indígenas a las que pertenecen las etnias objeto de esta acción.

La orden se deberá cumplir en un término máximo de seis (6) meses siguientes a la notificación de la presente tutela, término durante el cual el Gobernador del Departamento de Arauca deberá rendir informes periódicos cada mes sobre el avance de su gestión a la comisión de seguimiento de estos asuntos de la Corte Constitucional, hasta que la orden se cumpla.

OCTAVO: ORDENAR al MINISTERIO de EDUCACIÓN NACIONAL, para que en conjunto y articulación con la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE ARAUCA Y LAS SECRETARÍAS MUNICIPALES correspondientes del departamento de Arauca donde tengan asentamiento las comunidades indígenas objeto de protección, municipios de Arauca y Tame, presten asesoría y asistencia técnica, así como apoyo financiero necesario para la formulación del proyecto etnoeducativo de los pueblos SIKUANI y MAKAGUAN, indicando que para tales efectos la Secretaría Departamental de Educación de Arauca así como las Secretarías Municipales correspondientes, deben atender de manera prioritaria y diferenciada de acuerdo a la Constitución y las leyes en el sector educativo a la población indígena de los Resguardos de COROCITO, MATECANDELA y LA ESTRELLITA y de la Comunidad CAÑO MICO.

El término para el inicio de formulación del proyecto no será mayor a tres (3) meses contado a partir de la notificación de la presente tutela, sin superar el término de seis (6) meses para la construcción participativa del proyecto etnoeducativo, desde donde habría

Radicado: 2014-00052-03
Acción de tutela- Segunda instancia
Accionante: César Ortiz de Armas
Accionados: Asociación de cabildos indígenas del Cesar y la Guajira Dusakawi EPS y otros

de ajustarse la práctica pedagógica, la organización de la prestación del servicio y la formación docente, con el fin de asegurar una educación pertinente y de calidad para los estudiantes de esas comunidades.

Ordenar al MINISTERIO DE EDUCACIÓN construir sedes educativas adecuadas y escenarios deportivos que se necesiten, dotar de mobiliario, útiles escolares e implementos deportivos, apoyar en procesos de formación a docentes (etnoeducadores), promover la educación bilingüe, e implementar un modelo pedagógico acorde a las costumbres de los grupos étnicos, lo cual deberá empezar a hacerse en el término máximo de seis (6) meses, con la obligación de rendir cada dos (2) meses informe a la comisión de seguimiento de estos asuntos de la Corte Constitucional hasta que las órdenes se cumplan.

NOVENO: ORDENAR al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – REGIONAL ARAUCA, que dentro de su competencia realice programas de prevención, protección y restitución de derechos de las familias, los niños, niñas y adolescentes de las comunidades indígenas del Departamento de Arauca, así como de alimentación y nutrición, propiciando la integración social y readaptación al medio ambiente de los indígenas, en coordinación con las demás entidades a quienes tal asunto compete, aunque no hayan sido vinculados como accionados en esta tutela.

La orden deberá cumplirse en el término de ocho (8) días siguientes a la notificación de la presente tutela, con la obligación de rendir informes cada dos (2) meses a la comisión de seguimiento de estos asuntos de la Corte Constitucional.

DÉCIMO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR, a través de su División de Asuntos Indígenas o de quien corresponda, previa caracterización de los pueblos y comunidades indígenas del departamento de Arauca por parte de los equipos técnicos y de antropólogos, incluso escuchando a los profesionales de dicha área que trabajan en la región con las comunidades indígenas, actualice la base de datos y el mapa sobre los pueblos, resguardos y comunidades indígenas asentados en esta parte del país, determinando la situación en que se encuentran y el grado de vulnerabilidad conforme al respeto de sus derechos fundamentales y, en caso que en tal proceso advierta algún peligro, riesgo o violación de sus derechos asuma su protección en el ámbito de su competencia y/o noticie a los demás entes del Estado obligados a asumirla.

Radicado: 2014-00052-03
Acción de tutela- Segunda instancia
Accionante: César Ortiz de Amas

Accionados: Asociación de cabildos indígenas del Cesar y la Guajira Dusakawi EPS y otros

ONCE: ORDENAR a los entes de control, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, que en el ámbito de sus respectivas competencias ejerzan el control sobre la utilización de los recursos asignados a las comunidades indígenas para su asistencia, protección, sostenimiento y, en general para su bienestar y disfrute, y rindan cada seis (6) meses el informe respectivo a la comisión de seguimiento de estos asuntos de la Corte Constitucional.

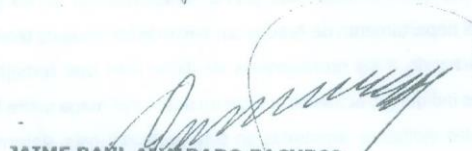
DOCE: COMPULSAR las copias pertinentes a la SALA DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE NORTE DE SANTANDER, para que investigue la presunta responsabilidad disciplinaria del Juez Segundo Penal del Circuito de Arauca por la dilación injustificada de los términos señalados para decidir de fondo la presente acción tutelar, en la forma como se consignó en la parte motiva de este proveído.

TRECE: LÍBRESE las comunicaciones y oficios a que haya lugar.

CATORCE: ENVÍESE el presente fallo a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,


MATILDE LEMOS SANMARTÍN
Magistrada Ponente


JAIME RAÚL ALVARADO PACHECO
Magistrado

Radicado: 2014-00052-03
Acción de tutela- Segunda instancia
Accionante: César Ortiz de Armas
Accionados: Asociación de cabildos indígenas del Cesar y la Guejira Dusakawi EPS y otros


ANGELA MARIA PUERTA CÁRDENAS
Magistrada


NURYS CECILIA ESTRADA PARALES
Secretaria General